



Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

EXPEDIENTE: 11001-33-35-010-2018-00392-00.
ACCIONANTE: LAUREANO MUÑOZ VÁSQUEZ.
ACCIONADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ASUNTO: MEDIDA CAUTELAR.

Acorde con lo previsto por el inciso cuarto del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, procede el Despacho a decidir la solicitud de medida cautelar presentada por la parte accionante¹, previas las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

LAUREANO MUÑOZ VÁSQUEZ, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, interpuso demanda contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 002312 de 24 de enero de 2018, RDP 005811 del 14 de febrero de 2018, RDP 022036 de 15 de junio de 2018 RDP 032181 de 2 de agosto de 2018, a través de las cuales, considera la parte demandante se efectuó el cobro de lo no debido al imponer una compartibilidad pensional entre la pensión restringida de jubilación a cargo de la UGPP y la Pensión de Vejez a cargo de Colpensiones, solicitando así mismo el consecuente restablecimiento del derecho.

Con escrito independiente, el demandante solicitó que, como medida cautelar, por este Despacho se declare la suspensión provisional de los actos administrativos descritos en precedencia, señalando que dichas Resoluciones imponen la compartibilidad pensional entre la pensión restringida de jubilación (pensión sanción), e indica igualmente que tampoco existe sentencia que haya anulado el acto administrativo que dio cumplimiento a la sentencia.

De igual forma, señala que la UGPP desconoció que la referida prestación tuvo un origen distinto y se financia con los recursos de la extinta Caja Agraria, mientras que la pensión de vejez que paga Colpensiones surge de las cotizaciones efectuadas por el trabajador o el afiliado al Sistema General de Seguridad Social a través del sector privado, por lo que su financiación tiene fuentes distintas.

¹ Cuaderno No. 2 de Medidas Cautelares



II. EL TRÁMITE SURTIDO

En acatamiento a lo previsto por el inciso segundo del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho a través de providencia de 11 de junio de 2021, corrió traslado a la demandada de la petición de medida cautelar para ejercer su legítimo derecho de defensa.

El auto en cita, fue notificado personalmente a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP el mismo día, la cual mediante escrito del 6 de julio de 2021, allegó escrito oponiéndose a la solicitud de medida cautelar, señalando que para el presente caso no concurren las condiciones para proceder a la suspensión provisional del acto demandado, teniendo en cuenta que el valor de la pensión sanción que se le reconoció al empleador, resulta ser más elevada que la pensión reconocida por el asegurador, es decir, Colpensiones, por lo que no puede considerarse que la mesada pensional del actor se incrementó con el reconocimiento de la pensión de vejez, únicamente vario la forma en que le es pagada la prestación mes a mes.

Concluye afirmando que dado a que el demandante percibió el pago de la mesada pensional por parte de Colpensiones y el ISS en su totalidad, sin que le asistiera derecho a recibirlas en su totalidad, dichas sumas de dinero deben ser reintegradas por el actor; significando lo anterior, que el acto administrativo demandado se encuentra ajustado a derecho, pues lo que se pretende con esté es evitar un detrimento patrimonial.

II. CONSIDERACIONES

Dispone el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, que en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el operador judicial, decretar, previa motivación, las medidas necesarias para brindar protección y garantizar, de manera provisional, el objeto y la efectividad de la sentencia, sin que ello implique un prejuzgamiento.

Por su parte, el artículo 230 de la misma norma, establece que las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, hallándose dentro de ellas la de ordenar la adopción de una decisión administrativa.

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuándo se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, así mismo sí se



pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

Tenido en cuenta lo anterior, y una vez revisadas las piezas procesales dentro del presente proceso, encuentra el Despacho que frente a la medida cautelar solicitada, no concurren la totalidad de los requisitos señalados en la ley, pues el aquí demandante, a pesar de haber aportado los documentos idóneos para el estudio de fondo de la cuestión a debatir, no argumentó ni justificó las razones que permitieran concluir, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

En segundo lugar, la solicitud de medida cautelar presentada no cumple ninguna de las condiciones tanto del perjuicio irremediable, como la existencia de serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

Ello, teniendo en cuenta que no se logra tener un grado de certeza y suficientes elementos fácticos que demuestren que de no llegar a expedirse un acto administrativo que cese los efectos jurídicos producidos por los actos administrativos demandados, se generaría un perjuicio grave, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona, tanto moral como material², pues de la revisión de las pretensiones se tiene que lo que aquí se debate no es el reconocimiento de la pensión sino la cesación de los efectos producidos por compartabilidad de la pensión sanción y la pensión de jubilación, lo que evidentemente demuestra que el señor Laureano Muñoz Sánchez recibe ingresos derivados de la pensión, y en consecuencia el pago de su seguridad social.

Ahora bien respecto de las demás pretensiones de la demanda, para lograr esclarecer la situación fáctica que determinó el reconocimiento de los descuentos de la pensión al demandante, se requiere de un estudio de fondo del proceso tanto jurisprudencial como normativo que es propio de la sentencia, para en últimas comprobar si los actos acusados desconocieron el ordenamiento legal, por lo que de acceder a la medida cautelar solicitada, esta instancia judicial excedería los límites de esta figura.

Conforme a las anteriores razones, el Despacho no accederá al decreto de la medida cautelar, por cuanto no concurrieron los requisitos establecidos en la ley, para que sean procedentes las medidas cautelares, así como también encuentra necesario evaluar la situación de quien percibe esta prestación económica con fundamento en jurisprudencia, normas y las pruebas que legal y oportunamente se logre recaudar, valorándolas en la etapa procesal correspondiente.

² Lo anterior fue delimitado por la Corte desde la sentencia T-225 de 1993 MP. Vladimiro Naranjo Mesa y reconocidas por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993 MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.



En mérito de lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de medidas cautelares presentada por la parte accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría del Despacho que, una vez notificado el presente auto, ingrese el expediente para continuar con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

Joff